

¿TIERRA, PLANES DE VIDA O BATALLONES?

Camilo González Posso

En el Cauca se está poniendo a prueba la estrategia de guerra o “consolidación de la paz” diseñada desde 2009 y ahora actualizada en la versión de la administración Santos. Como han advertido los indígenas y afros del Cauca estamos ante la escalada de la ‘madre de las batallas’ que tiene su muestra visible hoy en los municipios del norte del Cauca pero que forma parte de la disputa estratégica por el suroccidente, especialmente las zonas de influencia del Valle del Cauca y los corredores hacia el pacífico.

Durante los próximos meses es probable que se intensifiquen las hostilidades en los municipios de Toribio, Jambaló, Corinto, Caloto, Miranda y Paéz, es decir en la parte alta del nororiente caucano. Ya está en movimiento el batallón de alta montaña que tendrá base en Tacueyó y entrará en acción el “batallón de acción especial” para completar cinco batallones en el área, sumados a las unidades de policía y de la Fuerza Aérea. Entre tanto las FARC están reforzando al Frente VI y a la Jacobo Arenas con combatientes trasladados desde el oriente y con un mayor reclutamiento y activismo de milicianos. Las fuerzas armadas avanzan hacia el copiamiento del territorio desde la montaña hasta el valle del río Cauca y la guerrilla multiplica operaciones en sus tradicionales zonas de movilidad y hostiga para buscar desconcentrar a los militares. Y todo esto se completa con la presencia redoblada de los narcoparamilitares y narcotraficantes que tienen sus bases en Quilichao, Suárez, Buenos Aires y corredores hacia el pacífico.

Todo esto sería un juego de RISK en un tablero de fichas si no fuera porque la disputa militar por el territorio asume un tratamiento también de guerra a la población civil con impactos destructivos en comunidades, resguardos, cabildos y pueblos. La orden presidencial de destruir casas cuando sean utilizadas para ataques de la guerrilla a la fuerza pública es apenas un síntoma de una táctica que considera a la organización comunitaria e indígena como obstáculo al objetivo militar de combate y de control. Y las FARC, desde su orilla también han declarado que el CRIC, la ACIN y las autoridades indígenas deben ser debilitadas y suplantadas por oponer sus políticas de autonomía, identidad y rechazo a las armas, a su objetivos de copiamiento territorial y de reclutamiento.

La militarización de la región golpea también a las comunidades afrodescendientes en la parte plana que son sometidas a toda suerte de restricciones y a la intimidación por narcoparas, y milicianos. Las prioridades de la guerra asfixian los planes de vida de unos y otros y postergan la satisfacción de las demandas por tierra y territorio y de alternativas al confinamiento militar y al que conlleva la agroindustria de la caña y la titulación minera.

Como van las cosas, la gran batalla por el suroccidente tiene un pronóstico incierto en la neutralización de las FARC pero un resultado seguro en destrucción de comunidades y pueblos indígenas y afros. Los políticos del Cauca y del Valle son sordos y mudos cuando se trata de proponer alternativas que le den prioridad a las necesidades sociales y de empoderamiento de las comunidades; y el gobierno nacional, incluidos Presidente y Vicepresidente, no da muestras de entender la importancia de respetar a las autoridades indígenas y afros, de respetar los derechos territoriales, la consulta y consentimiento previos para macroproyectos y militarización de la propiedad colectiva. Con otra perspectiva tendrían respuestas a preguntas pendientes ¿cuánta tierra van a entregar a afros, indígenas y campesinos que desde hace una década están solicitando 50 predios en la parte plana? ¿Van a someter nuevos recursos de inversión social y de apoyo a planes productivos a la concertación y gestión autónoma de los cabildos y autoridades locales o los mantendrán centralizados y subordinados a la gestión militar de la consolidación? No creo que respondan, pero ... sorpresas te da la vida.

Popayán, 16 de julio de 2011